



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Medellín, primero (01) de febrero de dos mil trece (2013)

REFERENCIA:

EXPEDIENTE No. 05001-33-33-016-2012-00392-00

ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: **LAURA ELENA LOPERA DE DUQUE**

AUTORIDAD RECLAMADA: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION

AUTO INTERLOCUTORIO No. 013.

ASUNTO: INCIDENTE DE DESACATO FALLO DE TUTELA DEL 14 DE JUNIO DE 2012. – SANCIÓN POR DESACATO A SENTENCIA.

La señora **LAURA ELENA LOPERA DE DUQUE**, con cédula de ciudadanía número **43.010.291**, actuando a través de apoderado judicial, mediante escrito presentado el **09 de julio de 2012 (folio 01)**, propuso incidente de desacato en contra del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION**, por el incumplimiento de la **Sentencia No. 300/2012-T**, proferida el **14 de junio de la presente anualidad**, en la cual se dispuso:

“**1. TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**, invocado en nombre de la señora **LAURA ELENA LOPERA DE DUQUE**, identificada con la cédula de ciudadanía número **43.010.291**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

2. En consecuencia, SE ORDENA al **SEGURO SOCIAL**, a través de quien corresponda, que en un término que no puede exceder de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS**, contadas a partir de la notificación de esta providencia, **RESUELVA DE FONDO** las peticiones radicadas desde el **09 de septiembre de 2011** relativa a los recursos **y 10 de mayo de 2012**, relativa al derecho de petición.

Copia de la respuesta que se profiera en relación con la petición aludida, deberá ser enviada a este Despacho, en el mismo término concedido.

TRÁMITE IMPARTIDO AL INCIDENTE

1. Por auto del día 11 de julio de 2012, se dispuso iniciar el procedimiento que establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se requirió previo a abrir el incidente de desacato, al Gerente Seccional Antioquia y al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales en

liquidación, para que informara en el término de dos (02) días improrrogables sobre el acatamiento del fallo. El auto se notificó mediante oficio tal como obra en el expediente (folio 12 y 13 del cuaderno incidental), y a pesar de obtenerse respuesta, la misma no cumplía con la totalidad del fallo de tutela, toda vez que la entidad no resolvía por completo la petición del 10 de mayo de 2012.

2. Mediante providencia del 24 de julio del 2012 (F-14 del cuaderno incidental), se dispuso requerir nuevamente por el término de dos (02) días, al Gerente Seccional Antioquia y al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social en liquidación, decisión que también se notificó mediante oficio tal como obra en el expediente (Folio 17 a 18 del cuaderno incidental), **sin embargo dentro del término concedido reiteró la respuesta que ya había dado sin resolver por completo la petición del 10 de mayo de 2012.**

3. Ante la no respuesta por parte de la entidad accionada, a los dos (02) requerimientos previos a la apertura al incidente de desacato, esta Agencia Constitucional atendiendo a que aún se continuaba con la vulneración de los Derechos Fundamentales amparados a la parte accionante, por auto del 03 de agosto de 2012 (Folios 24 a 25 del cuaderno incidental), **dispuso abrir incidente de desacato contra la mencionada entidad**, concediéndole un término de tres (03) días para que se pronunciara al respecto; **sin obtenerse respuesta diferente por parte de la entidad accionada, pese a estar debidamente notificada como consta a folio 28 y 29 del cuaderno incidental.**

4. **Mediante auto del 23 de agosto de 2012 se requirió por última vez al Gerente Seccional Antioquia y al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social en liquidación, para que diera cumplimiento al fallo de tutela concediéndole un término de tres (03) días. El auto se notificó mediante la Empresa de correo certificado 472, toda vez que en esa época no recibían ninguna notificación en el ISS, debido al cese de actividades (Folio 52 del cuaderno incidental) y frente a este nuevo requerimiento no se obtuvo respuesta alguna.**

5. Antes de tomar una decisión de fondo, e impartiendo el trámite pertinente al incidente de desacato, mediante auto del 11 de septiembre de 2012 se abrió a pruebas el incidente de desacato, auto que se notificó el 13 de septiembre por estado, según consta a folio 53, y a pesar de obtenerse respuesta la misma no cumplía con lo ordenado por el Despacho.

6. Mediante autos del 14 y 22 de noviembre de 2012, y con la entrada en vigencia del Decreto 2013 del 2012, mediante el cual se suprimió el Instituto de seguros

sociales, se requirió nuevamente a la entidad accionada, a fin de que diera cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Despacho y para que procediera a comunicar a Colpensiones, el contenido de la decisión tomada por el Juzgado y suministrara los soportes y documentos necesarios que se encontraran en su poder. Obteniéndose la misma respuesta por parte de la entidad accionada.

Por auto del 06 de diciembre de 2012, se puso en conocimiento del Doctor Diego Alberto Vargas Gómez, el auto del 03 de agosto de 2012, mediante el cual se admitió el incidente de desacato, el cual fue notificado tal y como obra a folio 129 del expediente.

CONSIDERACIONES

1) Mediante Sentencia proferida el 14 de junio de 2012, esta Agencia Constitucional, resolvió la solicitud de amparo elevada por la peticionaria, tutelando los **Derechos Constitucionales Fundamentales invocados por aquella**, ordenándole al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, a través de quien correspondiera, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir a la notificación del fallo, **RESUELVA DE FONDO**, las peticiones radicadas desde el 09 de septiembre de 2011 y 10 de mayo de 2012, relativa al derecho de petición.

2) A la fecha, ha transcurrido más de siete (07) meses, desde la fecha del fallo, se ha surtido todo el tramite incidental descrito en los artículos 52 del Decreto 2591 de 1991 y 137 del Código de Procedimiento Civil, y el Instituto de Seguro Social, Seccional Pensiones - en cabeza del doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GÓMEZ, no se pronunció frente a la solicitud presentada el 10 de mayo del 2012, mientras tuvo competencia para ello, y con posterioridad a ello, tampoco ha remitido la información COLPENSIONES, para que esta última entidad resuelva lo concerniente a dicha petición, circunstancia que a todas luces configura un desacato a la orden que le fue impartida en el fallo de tutela, proferido por este Despacho el día catorce (14) de junio de 2012, la cual se recuerda, se circunscribió a resolver el recurso de apelación interpuesto contra una resolución que negó la sustitución pensional a la actora, así como a responder de fondo, un derecho de petición allegado por la actora, se reitera, desde el diez (10) de mayo de 2012.

En el caso, la entidad accionada sólo resolvió el recurso de apelación, pero guardo silencio frente al derecho de petición, esto es, cumplió en forma parcial, la orden impartida por esta Agencia Judicial, en el fallo que dirimió el amparo constitucional.

Así las cosas, se tiene que el doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, no ha dado cumplimiento integral, a lo dispuesto en la sentencia de tutela de la referencia, toda vez que dilató la respuesta al derecho de petición, hasta el punto que perdió competencia para absolver la inquietud del administrado, dada la entrada en operación de COLPENSIONES, pero tampoco ha remitido a esa nueva entidad la información necesaria para que ésta, responda de fondo, por lo que a todas luces está incurriendo en desacato a la orden judicial.

Se colige de lo anterior, que el doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, en su calidad de Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, omite el cumplimiento de la sentencia, y no invoca causal o justificación alguna para su no acatamiento, motivo por el cual es evidente que está incurrido en desacato.

3) El Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:

“Artículo 27. **Cumplimiento del fallo.** Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenara abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

(...)

Artículo 52. **Desacato.** La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.

Así las cosas, se tiene que cuando se trata de hacer efectivas las órdenes de las decisiones de tutela, es preciso comprender que ellas son producto explícito del valor normativo y del sentido vinculante de la Constitución (artículo 4° Superior). En efecto, entendiendo que el objeto de la acción de tutela se concentra en brindar una protección “*inmediata*” de los derechos fundamentales cuando éstos han sido violados o amenazados por “*cualquier autoridad pública*” o por los particulares en los casos que determine la ley, hay que señalar que la propia Constitución (artículo 86) se encargó de definir las reglas básicas para asegurar su vigencia y efectividad: (i) que el procedimiento que corresponde a esta acción sea preferente y sumario;

(ii) que la acción pueda ser interpuesta directamente por la persona afectada o por quien actúe a su nombre; (iii) que pueda promoverse en todo momento y lugar, ante cualquier juez de la República, (iv) que sea fallada por la autoridad judicial competente dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud; (v) que en caso de accederse a la tutela, la decisión debe consistir en una orden para que aquel respecto de quien se ha interpuesto el amparo, actúe o se abstenga de hacerlo; y (vi) **que el fallo sea de inmediato cumplimiento**, sin perjuicio de que pueda ser impugnado y posteriormente sometido al trámite de la revisión eventual ante la Corte Constitucional.

Los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 fijaron los diferentes eventos y las facultades de los jueces de instancia, para que éstos hagan cumplir las decisiones, haciendo explícitos el objetivo y contenido que deben tener los fallos de tutela, las garantías de su cumplimiento y a las sanciones derivadas de su eventual inobservancia.

Sobre el incumplimiento de los fallos judiciales la Corte Constitucional¹ ha expresado:

“Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de Derecho.

En el caso de los derechos fundamentales, de cuya verdadera eficacia ha querido el Constituyente ocuparse en forma reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí mismo un hecho flagrantemente violatorio del Ordenamiento fundamental.

Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.

De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado.

(...)

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible,

¹ Sentencia T-1686 del 6 de diciembre de 2000

frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal realización”.

En relación con el significado y alcance del término “*desacato*” previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 antes mencionado, ha explicado la Corte Constitucional²:

“El desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez, implica que el fallo o providencia de tutela no ha sido cumplido. Desde el punto de vista subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento debe ser deducida en concreto, en cabeza de las personas a quienes está dirigido el mandato judicial, lo que significa que estas deben gozar de la oportunidad de defenderse dentro del incidente y estar rodeadas de todas las garantías procesales.

(...).

El concepto de desacato, por otra parte, según se puede leer en la norma transcrita, alude de manera genérica a cualquier modalidad de incumplimiento de ordenes proferidas por los jueces con base en el Decreto 2591 de 1991, de lo cual resulta que no solamente puede configurarse a partir de la desatención, burla o incumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela sino también de la desobediencia a otras decisiones adoptadas por el juez en el curso del proceso, como por ejemplo las que ordenan la práctica de pruebas, la remisión de documentos, la presentación de informes, la supresión de aplicación de un acto o la ejecución de medidas provisionales para proteger los derechos en peligro.

De la misma manera, cabe el incidente de desacato y por supuesto la sanción, cuando se desobedece la orden judicial en que consiste la prevención de no volver a incurrir en ciertas conductas porque en el caso específico haya un hecho superado o un evento de sustracción de materia.

(...).

Dígase en primer término que las sanciones por desacato de providencias de tutela no solamente pueden imponerse a solicitud de parte interesada. También de oficio o por intervención del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en guarda de los derechos fundamentales (arts. 277, nums. 1º, 2º y 7º, y 282 de la C. P.), pueden los jueces de tutela iniciar los trámites enderezados a establecer si una determinada providencia basada en el artículo 86 de la Constitución ha sido eventualmente desacatado.

Ahora bien, en el caso de que la actuación provenga de solicitud de parte, cualquiera de los interesados y no obligatoriamente todos —como si la norma exigiera que estuviesen integrados en litis consorcio necesario—, tiene derecho a promover el incidente y a pedir que se impongan las sanciones que contempla el Decreto 2591 de 1991”.

También se ha enfatizado por parte de las Altas Cortes, en reiteradas oportunidades, que para la imposición de una sanción por desacato en los casos relativos a las acciones de tutela, es requisito ineludible, acudir a un

² Sentencia T-766 del 9 de diciembre de 1998

concepto de responsabilidad subjetiva, la cual se ha de analizar para cada caso concreto, respecto al funcionario, servidor o persona encargada de dar cumplimiento a la orden impartida como corolario del trámite diseñado para la acción de tutela, en el Decreto 2591 de 1991 y no, frente a la entidad como persona jurídica, pues la culpa a pregonar en el caso de desacato a providencias judiciales, es de raigambre indudablemente personal.

Ahora bien, no puede dejar de lado este Despacho que mediante los Decretos 2011, 2012 y 2013 expedidos el 28 de Septiembre de 2012, el Presidente de la República ordena la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ISS, imponiendo entonces la continuación de la carga, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

Es más, a efectos de dar mayor claridad sobre las cargas y responsabilidades en cabeza del representante legal de COLPENSIONES, es pertinente recurrir a la literalidad del Artículo 3° del Decreto 2011 de 2012 *“Por el cual se reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES y se dictan otras disposiciones”*,

“Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES. La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:

- 1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, **incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales ISS, o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del presente Decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo.***
- 2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales - ISS como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.*
- 3. **Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales - ISS y de los afiliados de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM.***
- 4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte que administraba el Instituto de Seguros Sociales -ISS de que trata la Ley 100 de 1993.*
- 5. Efectuar el recaudo de los aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES establezca para tal efecto.*

(Subrayas y negrillas fuera del texto original)

A su turno, el Decreto 2013 de 2012 en el inciso 4 y 5 de su artículo 2° reza:

“Excepcionalmente, con el objeto no afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por un término no superior a seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se

*encuentren en curso al momento de entrada en vigencia del presente decreto. **El cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a Colpensiones.***

***Una vez notificadas las ordenes de tutela el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación procederá de inmediato a comunicar a Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará los soportes y documentos necesarios que aun se encuentren en su poder para que Colpensiones proceda a su cumplimiento.** De lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación informará al Juez competente.”*

(Subrayas y negrillas fuera del texto original)

De la normativa antes citada, se colige que el cumplimiento de las órdenes, aun emitidas en contra del Instituto de Seguro Social hoy en liquidación, serán de responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, **no obstante, el Instituto de Seguro Social en Liquidación conserva su obligación de remitir toda la documentación que en su poder se encuentre, necesaria para el cumplimiento del fallo, lo que aún no ha hecho, pese a mediar requerimiento en dicho sentido.**

A la par con lo anterior, al menos momentáneamente, no cabe la imposición de sanción alguna en contra del representante legal de COLPENSIONES, toda vez que esta entidad a la fecha, no dispone de la documentación e información necesaria para resolver la solicitud hecha por la accionante circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de declararlo incurso en desacato. No obstante lo anterior, ello no impide que a futuro, de encontrarse viable jurídicamente hablando, se adelante incidente por desacato, en contra del servidor responsable al interior de COLPENSIONES, de dar cumplimiento a la orden de tutela contenida en el fallo de junio catorce (14) de 2012.

4) Se reitera entonces, que en el caso *sub judice*, no se encuentra acreditado que el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, haya dado cabal cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por esta Agencia Constitucional.

De lo antes dicho, observa el Despacho una dilación injustificada, ausencia de pronunciamiento concreto, y falta de diligencia y cuidado en la tramitación de la situación de la señora LAURA ELENA LOPERA DE DUQUE, sin que la entidad accionada, en este caso el ISS, a través del funcionario encargado de obedecer la orden judicial, haya realizado un pronunciamiento concreto y de fondo tendiente a solucionar y tramitar el caso de la accionante, generándose tal como se reseñó anteriormente incumplimiento a la orden judicial emitida por el Despacho.

Conforme a lo expuesto, se tiene que efectivamente el funcionario incidentado, ha desacatado el fallo de tutela proferido el 14 de junio de 2012, pues a la fecha, ha transcurrido más de siete (07) meses, sin que el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a través de su Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, haya cumplido a cabalidad con lo ordenado en la citada providencia. Ninguna actividad desplegó este funcionario, en cuanto a dar respuesta suficiente y clara, que de cumplimiento al fallo de tutela, **ni se han ofrecido las razones por las cuales no se ha hecho, a pesar que se le concedieron varias oportunidades con los requerimientos que se les hizo, haciéndose evidente la omisión de realizar los actos necesarios para dar estricto cumplimiento a las ordenes judiciales emitidas en el presente asunto.**

5. Ahora bien, teniendo en cuenta el contenido de la orden de tutela y la conducta asumida por la entidad accionada, a través del Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, Doctor **DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ**, se estima procedente sancionar a dicho funcionario, con **multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales**, que deberán consignar de su **propio peculio** dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario de Colombia, cuenta número 3-0070-000030-4 -concepto multas y cauciones efectivas- a favor del Consejo Seccional de la Judicatura³. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente.

También se dispondrá Oficiar a la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de la parte final del inciso 1° del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 para que disponga las sanciones penales a que haya lugar y a la Procuraduría General de la Nación para que le imponga las sanciones disciplinarias de su competencia (art. 7 del Código Contencioso Administrativo⁴ y art. 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁵).

No obstante la sanción de multa impuesta, se advierte al funcionario incurso en desacato, que deberá dar cumplimiento al fallo de tutela de **MANERA INMEDIATA**, en los términos ordenadas en el mismo.

³ Se aclara que la suma impuesta deberá cancelarse del patrimonio del funcionario sancionado por cuanto el incumplimiento al fallo se debe a una conducta omisiva de su parte y la sanción es personal y no institucional.

⁴ Código Contencioso Administrativo. Art. 7. Desatención de las peticiones: “*La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3° y la de los términos para resolverlos o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y dará lugar a las sanciones correspondientes*”.

⁵ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 31. Falta disciplinaria: “*La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y al desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.*”

Tal como lo consagra el artículo 52 inciso segundo de la normatividad antes indicada, esta decisión se someterá a consulta ante el Superior Jerárquico de esta jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, El **JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN - Doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ,** incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por esta Oficina Constitucional, el día **14 de junio de 2012,** en los términos allí establecidos.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, se **ORDENA** al **doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PENSIONADO DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN** que proceda a dar **CUMPLIMIENTO INMEDIATO,** a la orden proferida en sentencia de tutela del **catorce (14) de junio de dos mil doce (2012).**

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, sanciónese al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN - Doctor DIEGO ALBERTO VARGAS GOMEZ,** con **MULTA DE CINCO (5) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** que deberán consignar de su **propio peculio** dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario de Colombia, cuenta número 3-0070-000030-4 - concepto multas y cauciones efectivas- a favor del Consejo Seccional de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo.

CUARTO: Oficiese a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos dispuestos en la parte motiva.

SEXTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta decisión al funcionario en desacato, para lo cual la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de esta ciudad deberá agotar los medios y gestiones necesarias tendientes a procurar el cumplimiento efectivo de la citada notificación.

SÉPTIMO: Abstenerse de imponer sanción alguna, contra el representante legal de COLPENSIONES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. Esta decisión deberá consultarse por el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RODRIGO VERGARA CORTÉS

Juez